



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2015-00549-00
PROCESO: EJECUTIVO
EJECUTANTE: ANA LILIA RAMOS DE QUINTERO
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES –
UGPP

A través de sentencia del 21 de mayo de 2018, proferida en audiencia inicial, el Despacho declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y, ordenó seguir adelante la ejecución, disponiendo que se realizara la liquidación del crédito de conformidad con el artículo 446 del C.G.P. (fls. 241-258), siendo esta providencia notificada a las partes en estrados.

La predicha sentencia, fue objeto de apelación por la parte demandada dentro de la misma audiencia; razón por la que se concedió el mismo en el efecto devolutivo (fl. 257), y se ordenó la remisión del expediente al Superior para lo de su competencia.

El H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante proveído de fecha 20 de septiembre de 2018, confirmó la sentencia apelada, y dispuso condenar en costas a la parte demandada (fls. 280-287).

Con base en lo anterior, y siguiendo el curso del proceso, el apoderado de la parte actora procedió a presentar la liquidación de crédito, tal como se puede observar en el memorial obrante a folios 260 a 263 del cuaderno No.2.

Habiéndose corrido traslado de la liquidación aportada por la parte demandante, la Ugpp, no realizó pronunciamiento u objeción al respecto.

Así las cosas, de conformidad con lo allegado al plenario, debe el Despacho resolver si es viable o no aprobar la liquidación del crédito planteada por la activa, y para el efecto se analizará lo siguiente:

A. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PRESENTADA

El apoderado de la parte actora, en memorial en el que aporta la liquidación de crédito, indicó:

“Es preciso advertir como primera medida, que la liquidación de los intereses se debe dar en su totalidad en los términos del artículo 177 del C.C.A., norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos y/o causación de la obligación, entendiendo además, que la demanda ordinaria se radico en su vigencia del CCA, y que bajo esta misma cuerda se dictó la sentencia y quedo ejecutoriada la misma. Lo anterior, conforme lo previsto en el artículo 308 del CPACA que dispuso, de un lado su aplicación con efecto general e inmediato a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien desde el 2 de julio de 2012; y del otro, reservó la fuerza obligatoria de la ley antigua (C.C.A.) para las situaciones jurídicas surgidas con anterioridad a esa fecha, pero que no se hubiesen agotado en ese momento.

(...)

Base liquidación:

Valor tomado y contenido en liquidación detallada, documento aportado como anexo en el presente proceso, y que fue expedido por la misma UGPP para certificar los dineros cancelados con ocasión del cumplimiento de fallo judicial, de donde puede identificarse que para la fecha de ejecutoria el valor adeudado corresponde a \$29.596.249,80

(...)

Variación mensual de la Base de liquidación:

Dilucidado el valor a la fecha de ejecutoria, este va incrementado mensualmente hasta agosto de 2010(mes en el que fue aumentada la mesada), situación que debe ser de recibo por este Despacho, pues un mismo valor no puede mantenerse desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de inclusión en nomina o amento de mesada, puesto que el capital varia al mes siguiente de la ejecutoria del fallo y sucesivamente cada mes hasta el pago de la obligación, toda vez que se siguen generando diferencias mensuales al no aumentarse la mesadas pensional inmediatamente quedo ejecutoriado el fallo.

Igualmente, obsérvese que la base de liquidación queda estática a partir de agosto de 2010 con una suma de \$39.667.428,86, pues en dicho mes que se general el incremento de mesadas y por ende cesación de retroactivos.

Tener en cuenta todos los meses la misma base de liquidación de noviembre de 2008, iría en contra de los intereses de mi asistido, quien tuvo que esperar más de 2 año desde que la sentencia quedo ejecutoriada para que se hiciera efectivo su pago.

Dicho aumento y para mayor entendimiento practico de este Despacho, si tomamos los \$29.596.249,80, y le sumamos la diferencia de mesada para el año 2008 (\$373.589,07 multiplicada por dos debido a la mesada adicional de diciembre:\$747.178,14) arroja los \$30.343.427,94, utilizados como base de liquidación para el mes de diciembre de 2008, mes siguiente a la fecha de ejecutoria.”

Así mismo, aportó la siguiente liquidación con la cual soporta las sumas pretendidas a título de intereses moratorios:

TABLA LIQUIDACIÓN INTERESES MORATORIOS							
Valor Retroactivos a la fecha de Ejecutoria						\$ 25.537.013,62	
Valor Indexación de mesadas a la fecha de Ejecutoria						\$ 4.059.236,18	
Total Mesadas Atrasadas indexadas a la fecha de ejecutoria						\$ 29.596.249,80	
DÍA SIGUIENTE A FECHA DE EJECUTORIA						29-nov-2008	
Mes inclusión en nómina		dic-10		Mes <u>anterior</u> inclusión en nómina			nov-10
				Días en Mora			731
Desde	Hasta	Base Liquidación	Int. Corriente Bcario	Int. Mora a Liquidar	Tasa mora mes	Días	interés mensual
29/11/2008	30/11/2008	\$ 29.596.249,80	21,02	31,53	2,63	2	\$ 51.843
01/12/2008	31/12/2008	\$ 30.343.427,94	21,02	31,53	2,63	31	\$ 823.849
01/01/2009	31/01/2009	\$ 30.745.671,29	20,47	30,71	2,56	31	\$ 812.928
01/02/2009	28/02/2009	\$ 31.147.914,65	20,47	30,71	2,56	28	\$ 743.864
01/03/2009	31/03/2009	\$ 31.550.158,00	20,47	30,71	2,56	31	\$ 834.199
01/04/2009	30/04/2009	\$ 31.952.401,35	20,28	30,42	2,54	30	\$ 809.993
01/05/2009	31/05/2009	\$ 32.354.644,71	20,28	30,42	2,54	31	\$ 847.530
01/06/2009	30/06/2009	\$ 33.159.131,41	20,28	30,42	2,54	30	\$ 840.584
01/07/2009	31/07/2009	\$ 33.561.374,76	18,65	27,98	2,33	31	\$ 808.480
01/08/2009	31/08/2009	\$ 33.963.618,12	18,65	27,98	2,33	31	\$ 818.169
01/09/2009	30/09/2009	\$ 34.365.861,47	18,65	27,98	2,33	30	\$ 801.154
01/10/2009	31/10/2009	\$ 34.768.104,82	17,28	25,92	2,16	31	\$ 776.024
01/11/2009	30/11/2009	\$ 35.170.348,17	17,28	25,92	2,16	30	\$ 759.680
01/12/2009	31/12/2009	\$ 35.974.834,88	17,28	25,92	2,16	31	\$ 802.958
01/01/2010	31/01/2010	\$ 36.385.123,10	16,14	24,21	2,02	31	\$ 758.539
01/02/2010	28/02/2010	\$ 36.795.411,32	16,14	24,21	2,02	28	\$ 692.858
01/03/2010	31/03/2010	\$ 37.205.699,54	16,14	24,21	2,02	31	\$ 775.646
01/04/2010	30/04/2010	\$ 37.615.987,76	15,31	22,97	1,91	30	\$ 719.876
01/05/2010	31/05/2010	\$ 38.026.275,98	15,31	22,97	1,91	31	\$ 751.985
01/06/2010	30/06/2010	\$ 38.846.852,42	15,31	22,97	1,91	30	\$ 743.432
01/07/2010	31/07/2010	\$ 39.257.140,64	14,94	22,41	1,87	31	\$ 757.565
01/08/2010	31/08/2010	\$ 39.667.428,86	14,94	22,41	1,87	31	\$ 765.482
01/09/2010	30/09/2010	\$ 39.667.428,86	14,94	22,41	1,87	30	\$ 740.789
01/10/2010	31/10/2010	\$ 39.667.428,86	14,21	21,32	1,78	31	\$ 728.079
01/11/2010	30/11/2010	\$ 39.667.428,86	14,21	21,32	1,78	30	\$ 704.593
732							
TOTAL INTERESES DE MORA LIQUIDADOS						\$ 18.670.099	

B. TRASLADO

Tal como lo dispone el artículo 446 del C.G.P., de la liquidación de crédito que presente una de las partes, se debe correr traslado a la otra, en la forma prevista en el artículo 101 de la norma, en cuyo término se pueden formular objeciones.

En este sentido, la secretaría del Despacho procedió a correr el respectivo traslado de la liquidación a la parte demandada el día 30 de mayo de 2018, tal como se puede observar en la constancia obrante a folio 264 (cuaderno No.2.), corriendo el término desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio de 2018.

No obstante al procedimiento realizado por el Despacho, la entidad ejecutada, no se pronunció frente a la liquidación de crédito aportada por la parte actora.

En tales condiciones, procede el Despacho a pronunciarse respecto a la liquidación efectuada por la parte ejecutante.

CONSIDERACIONES

Como primera medida, es indispensable reiterar por parte del Despacho, lo anotado dentro de la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución, pues este Despacho Judicial realizó las siguientes precisiones, con el objeto que fueran tenidas en cuenta al momento de realizarse la liquidación del crédito:

“Por tal razón, el Juzgado hace unas precisiones frente a la liquidación del crédito a realizarse, aclarando que el monto por el cual se libró mandamiento ejecutivo no es necesariamente el valor a cancelar, toda vez que ello está sujeto a la liquidación del crédito, así como de las revisiones que oficiosamente haga el Despacho, pues la suma a pagar en los términos de la sentencia y lo pretendido en el proceso, son únicamente los intereses que generó el capital actualizado o debidamente indexado a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, desde esta data hasta la fecha en que se incluyó en nomina o se realizó el pago del capital debidamente indexado, aclarando que el referido capital indexado a la fecha de la mencionada ejecutoria, no puede ser indexado nuevamente con posterioridad a la fecha de su firmeza. Así mismo, que los intereses pretendido no pueden capitalizarse. (fl.252 cuaderno No.1.)

En este sentido, el mandamiento de pago de fecha 10 de marzo de 2017, también indicó lo siguiente:

“En ese sentido se tiene que el numeral 5º de la parte resolutive de la sentencia proferida por este estrado judicial, se impartió orden de cumplimiento a la misma en los términos señalados en la norma ya referida, esto es con la inclusión de los intereses moratorios.

La decisión judicial quedó ejecutoriada el 28 de noviembre de 2008, la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.(Hoy liquidada), profirió la Resolución No.

PAP 008181 del 10 de agosto de 2010, que fue incluida en nomina en el mes de diciembre de 2010, en donde no se reflejó el pago de los intereses moratorios, hecho que fue ratificado por la entidad pública, en el Oficio numero UGPP 20'145025324721 suscrito por el Subdirector de Nomina de Pensionados de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP.

Así mismo se establece que la parte actora solicitó el cumplimiento de la providencia el día 5 de mayo de 2009, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Por lo expuesto el Despacho librará mandamiento ejecutivo por los intereses moratorios insolutos.

De otra parte, en cuanto a la indexación de los intereses moratorios, debe decirse que el actor interpreta indebidamente el mandato contenido en el título ejecutivo, toda vez que la indexación que se ordena en el mismo, es respecto al capital adeudado que corresponde a la diferencia mensual que resulta de la reliquidación de la pensión por inclusión de nuevos factores salariales tal y como se establece en los numerales segundo y tercero de la parte resolutive de la sentencia. Es decir, en la sentencia no se ordenó la indexación de los intereses moratorios y por ende haría mal el Despacho con fundamento en el título referido, disponer tal reconocimiento, habida consideración que la causación de los mismos no está contenido en la sentencia que funge como título de recaudo ejecutivo.

Adicionalmente por cuanto en decisión proferida por el Consejo de Estado, se ha determinado que la cualidad de los intereses moratorios conduce a que por vía del ejecutivo no se solicite la indexación, “pues esos intereses comportan conjuntamente los conceptos de indexación y de interés legal. Así lo indica, claramente, el artículo 65 de la ley 23 de 1991, que fue modificado por el 72 de la ley 446 de 1998. Acorde con lo anterior, se tiene que las cantidades liquidas reconocidas devengan intereses moratorios, en la forma como lo menciona el artículo 884 del Código de Comercio, es decir, el equivalente a una y media veces del bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria.

En este punto, debe ilustrar el Despacho a la parte demandante respecto del contenido del enunciado normativo previsto en el artículo 1653 del Código Civil, que consagra lo siguiente:

“Artículo 1653. Imputación del pago a intereses. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.
Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados.”

Conforme a la normatividad referida, por regla general no puede imputarse pago a capital si aún no se han satisfecho los intereses, excepto que el acreedor los consienta y/o permita.

Acorde a ello, al presentarse la demanda ejecutiva por los intereses moratorios, lógico es concluir que la parte demandante está aceptando el pago a capital sin haberse cubierto los intereses; por lo que al iniciarse el ejecutivo por los intereses moratorios y no por el capital adeudado, no puede pretender el reconocimiento de indexación sobre los mismos, los cuales no están ordenados ni en el título ni en disposición alguna que regule el proceso ejecutivo. Así mismo, la causación de intereses sobre intereses, habida consideración que conforme lo dispone el Art. 886 del Código de Comercio, si es procedente tal causación pero a partir de la demanda, si y solo si el demandante los solicita en el libelo, toda vez que se le está vedado al Juez librar mandamiento ejecutivo por conceptos y/o sumas diferentes a las solicitadas en la demanda.

Al respecto el Art. 886 del Código de Comercio preceptúa:

“Artículo 886. Anatocismo. Los intereses pendientes no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos.”

En concordancia con lo expuesto, y teniendo en cuenta que lo que se solicita es librar mandamiento ejecutivo por los intereses moratorios adeudados, más la indexación de los mismos, **sin pretenderse el reconocimiento y pago de los intereses del saldo insoluto, se librará mandamiento ejecutivo únicamente por el capital que corresponde a los intereses adeudados conforme al artículo 177 del C.C.A.,** negando por carecer de título la indexación pretendida”.¹

Ahora bien, se observa que el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al momento en que se profirió sentencia de mérito en el proceso ordinario, en relación con los intereses por los cuales se libró mandamiento de pago, disponía:

“Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.
(...)

<Apartes tachados Inexequibles – Sentencia C-188 de 1999> **Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término.**

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> **Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo**

¹ Folio 65 y 67 del plenario.

***desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.
(...)"***

Al respecto, la Corte Constitucional al realizar el control de constitucionalidad de esta norma definió el tipo de intereses que se causan a partir de la ejecutoria de la sentencia y sobre el particular determinó:

"(...) la Administración Pública está obligada por un acto suyo a pagar unas determinadas cantidades de dinero a los particulares con quienes concilia y éstos tienen derecho a recibirlas dentro de los términos pactados. No se pierda de vista que ellos sufren perjuicio por la mora en que la Administración pueda incurrir. Tales perjuicios se tasan anticipadamente mediante la fijación por la propia ley de intereses moratorios.

Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago, las obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados. Durante ese tiempo, el dinero no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y no existe razón válida para que esa pérdida la deba soportar el particular y no el Estado, que incumple.

Es evidente la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que, con independencia de si el deudor es el gobernado o el ente oficial, el hecho es el mismo; la circunstancia es equivalente; el daño económico que sufre el acreedor por causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las personas privadas.

Por otro lado, en la disposición impugnada se muestra con claridad el desconocimiento de los principios de igualdad, eficacia y celeridad, que deben presidir la función administrativa, según el artículo 209 Ibidem. El Estado, en sus relaciones con los particulares, no puede asumir legítimamente las conductas que censura y castiga si provienen de ellos. Si les exige puntualidad en el pago de sus obligaciones tributarias, y si tan duramente castiga el hecho de que no las cancelen a tiempo, elementales principios de justicia y equidad hacen imperativo que, correlativamente, su propio comportamiento en idénticas situaciones se ajuste a las exigencias que formula a los particulares. Pero, además, la mora en el pago de las obligaciones a cargo del fisco delata, en los servidores públicos responsables, un deplorable descuido que no encaja dentro de los criterios constitucionales que deben inspirar la actividad administrativa.

Para la Corte, carece de fundamento la justificación que pretende aportar en este caso el Procurador General de la Nación, consistente en que las personas jurídica de Derecho Público deben administrar sus recursos con base en el correspondiente presupuesto anual de ingresos y gastos, de lo cual pasa a sustentar la constitucionalidad del término de seis meses. Aunque en verdad, por mandato del artículo 345 de la Constitución, en tiempo de paz no puede hacerse erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el Presupuesto de gastos, es de elemental previsión, acorde con una mínima responsabilidad del Estado en el manejo de sus recursos, que se contemplen en los presupuestos anuales partidas destinadas al pago de las obligaciones a su cargo y de los intereses que se generan por razón de los retardos en que incurra. La negligencia administrativa no puede ser fuente de enriquecimiento sin causa para las arcas estatales ni de injustificado perjuicio para los particulares con quienes él mantiene pasivos.

Se declararán inexecutable las expresiones que, en la norma, dan lugar a la injustificada e inequitativa discriminación objeto de examen, y que favorecen la ineficiencia y la falta de celeridad en la gestión pública.

Las mismas razones expuestas son válidas respecto del último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984), que dice:

"Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término".

Se declarará la unidad normativa y, por consiguiente, la disposición transcrita será declarada executable, salvo las expresiones "durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria" y "después de este término", que serán declaradas inexecutable.

Es entendido que, en las dos normas sobre cuya constitucionalidad resuelve la Corte, el momento en el cual principia a aplicarse el interés de mora depende del plazo con que cuente la entidad pública obligada, para efectuar el pago. Así, en el caso de la conciliación, se pagarán intereses comerciales durante el término que en ella se haya pactado y, vencido éste, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de mora. **En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia,** sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria."²

Negrillas del Despacho

² Sentencia C-188/99 Referencia: Expediente D-2191. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 446 de 1998. Demandantes: Ana María Acosta, Juliana Gómez, Cristina Trujillo, Adriana Gómez, Catalina Roza Y Claudia Ochoa Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO. Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veinticuatro (24) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

“Lo anterior, partiendo de la base que la génesis de los intereses moratorios obedece a una necesidad resarcitoria y protectora frente a los derechos pensionales que no hayan sido reconocidos. Por lo tanto, ordenar una reliquidación de la mesada pensional, parte de la base de que el derecho ya fue adjudicado, aunque de manera errónea. Al respecto, fue abordado de manera reciente en sentencia CSJ SL164-2018, donde se esgrimió

En lo que concierne a este punto, basta con recordar que a juicio de esta Corporación los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 proceden cuando existe mora o retardo en el pago de las pensiones, pero no frente a su pago incompleto o deficitario. Así, en sentencia CSJ SL21027, 4 sep. 2003, reiterada en SL11427-2016 y SL12765-2017, se adocrinó:

Además, ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios “sólo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial” (Rad. 13717-30 de junio de 2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en “los reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1° de enero de 1998, atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior”.

Por ello concluye el Despacho, **que lo que se sanciona es el no pago oportuno del derecho previamente reconocido.**

Por otra parte, como fue expuesto, el artículo 177 del C.C.A, dispone el reconocimiento de intereses sobre las sumas liquidas reconocidas en la sentencia. Ahora las sentencias pueden dar órdenes en concreto o en abstracto, de ahí que se infiera que las sumas adeudadas sean liquidas o liquidables.

De otra parte, sobre los referidos intereses, se aclara que la liquidación de los mismos debe hacerse únicamente **sobre el valor neto del capital y no sobre el capital bruto deprecado, es decir, sobre el capital respecto del cual ha de proyectarse los intereses y sobre el cual se libró mandamiento, necesariamente debe descontarse las sumas que van con destino a pagos de seguridad social en salud del pensionado, pues no es dable que sobre dichos rubros también se generen intereses en el entendido que dichas sumas no son percibidas por el actor y en todo caso solo podrían ser reclamados por la entidad prestadora del servicio de salud a la cual fueron girados.**

Así mismo, **se debe tener claridad que los intereses corresponden a los que se causaron desde la ejecutoria de la sentencia hasta el día anterior a la inclusión en nómina de pensionados**, motivo por el cual, para asuntos como el presente, no podrá hablarse de actualización de liquidación del crédito, pues la causación de intereses culminó con antelación incluso a la presentación de la demanda ejecutiva.

Por lo expuesto, y una vez realizadas las operaciones aritméticas frente a la liquidación de crédito aportada por la parte actora, este Despacho procederá a

En ese sentido, se tiene que el numeral quinto de la parte resolutive de la sentencia proferida por este Despacho, impartió orden de cumplimiento a la misma en los términos señalados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

La decisión judicial fue debidamente notificada a las partes, quedando ejecutoriada la providencia el 28 de noviembre de 2008 (fl. 54 vto).

En consecuencia, los valores adeudados **a título de intereses moratorios**, deben ser aquellos que resulten de aplicar la fórmula respectiva, **sobre el capital adeudado al momento de la ejecutoria del fallo (28 de noviembre de 2008)**, que fue el instante preciso en el que nació el derecho a reclamar las cantidades reconocidas en la sentencia, las cuales aunque no fueron liquidadas si son liquidables.

Por ello, se hace necesario establecer los efectos temporales tanto del art. 177 del C.C.A., como los del art. 141 de la ley 100 de 1993, para concluir que no puede ninguna de las partes incluir intereses diferentes a los que genere el capital indexado al momento de la ejecutoria de la sentencia y mucho menos de las diferencias de la mesada pensional de los meses posteriores a la referida ejecutoria, como quiera que estos tienen un fundamento diferente al dispuesto en la sentencia para su reclamación, que es el referido art. 141 de la ley 100 de 1993 que señala:

***“ARTICULO. 141. -Intereses de mora.** A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.”*

Se debe decir que, y esto para llegar a la conclusión expuesta en precedencia y acogiendo el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia³, en el cual se vienen denegando el reconocimiento de los referidos intereses del art. 141 de la ley 100 de 1993, en las demandas donde se solicita la reliquidación pensional, porque los plurimentados intereses solo se causan por la mora del pago, más no por el reconocimiento incompleto de la prestación.

Dicha posición fue reafirmada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL-1642018 cuando explicó:

³ **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, MAGISTRADO FONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS, Referencia: Expediente No. 38993, Acta No. 25,** Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil nueve (2010) *“Además ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios “...sólo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial (Rad. 13717 – 30 junio de 2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en “los reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1º de enero de 1998, atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.” Sentencia Radicación No. 26754 de 2006.”*

modificar la liquidación del crédito dentro del presente asunto, la cual quedará de la siguiente manera:

CAPITAL INDEXADO	39.692.334,63	Fecha Ejecutoria:	28-Nov-08	f. 54
DESCUENTOS SALUD	3.327.887,58	Fecha Nomina.	Dic-10	f.30
CAPITAL NETO	36.364.447,05			

LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS

LIQUIDACIÓN INTERESES MORATORIOS							
FECHA		CAPITAL	DÍAS A PAGAR	% INT. CORRI	% INT. MORA	VALOR INT. MORA	INT. MORA ACUMULADO
DESDE	HASTA						
28/11/2008	30/11/2008	\$ 36.364.447,05	2	21,02%	2,310%	\$ 56.004,96	\$ 56.004,96
01/12/2008	31/12/2008	\$ 36.364.447,05	31	21,02%	2,310%	\$ 868.076,92	\$ 924.081,88
01/01/2009	31/01/2009	\$ 36.364.447,05	31	20,47%	2,257%	\$ 847.924,10	\$ 1.772.005,99
01/02/2009	28/02/2009	\$ 36.364.447,05	28	20,47%	2,257%	\$ 765.866,93	\$ 2.537.872,92
01/03/2009	31/03/2009	\$ 36.364.447,05	31	20,47%	2,257%	\$ 847.924,10	\$ 3.385.797,02
01/04/2009	30/04/2009	\$ 36.364.447,05	30	20,28%	2,238%	\$ 813.808,18	\$ 4.199.605,20
01/05/2009	31/05/2009	\$ 36.364.447,05	31	20,28%	2,238%	\$ 840.935,12	\$ 5.040.540,31
01/06/2009	30/06/2009	\$ 36.364.447,05	30	20,28%	2,238%	\$ 813.808,18	\$ 5.854.348,49
01/07/2009	31/07/2009	\$ 36.364.447,05	31	18,65%	2,077%	\$ 780.394,96	\$ 6.634.743,45
01/08/2009	31/08/2009	\$ 36.364.447,05	31	18,65%	2,077%	\$ 780.394,96	\$ 7.415.138,42
01/09/2009	30/09/2009	\$ 36.364.447,05	30	18,65%	2,077%	\$ 755.220,93	\$ 8.170.359,35
01/10/2009	31/10/2009	\$ 36.364.447,05	31	17,28%	1,939%	\$ 728.685,80	\$ 8.899.045,15
01/11/2009	30/11/2009	\$ 36.364.447,05	30	17,28%	1,939%	\$ 705.179,81	\$ 9.604.224,95
01/12/2009	31/12/2009	\$ 36.364.447,05	31	17,28%	1,939%	\$ 728.685,80	\$ 10.332.910,75
01/01/2010	31/01/2010	\$ 36.364.447,05	31	16,14%	1,823%	\$ 685.064,65	\$ 11.017.975,40
01/02/2010	28/02/2010	\$ 36.364.447,05	28	16,14%	1,823%	\$ 618.768,07	\$ 11.636.743,47
01/03/2010	31/03/2010	\$ 36.364.447,05	31	16,14%	1,823%	\$ 685.064,65	\$ 12.321.808,12
01/04/2010	30/04/2010	\$ 36.364.447,05	30	15,31%	1,738%	\$ 631.894,57	\$ 12.953.702,69
01/05/2010	31/05/2010	\$ 36.364.447,05	31	15,31%	1,738%	\$ 652.957,72	\$ 13.606.660,42
01/06/2010	30/06/2010	\$ 36.364.447,05	30	15,31%	1,738%	\$ 631.894,57	\$ 14.238.554,98
01/07/2010	31/07/2010	\$ 36.364.447,05	31	14,94%	1,699%	\$ 638.548,87	\$ 14.877.103,85
01/08/2010	31/08/2010	\$ 36.364.447,05	31	14,94%	1,699%	\$ 638.548,87	\$ 15.515.652,71
01/09/2010	30/09/2010	\$ 36.364.447,05	30	14,94%	1,699%	\$ 617.950,51	\$ 16.133.603,23
01/10/2010	31/10/2010	\$ 36.364.447,05	31	14,21%	1,623%	\$ 609.944,08	\$ 16.743.547,31
01/11/2010	30/11/2010	\$ 36.364.447,05	30	14,21%	1,623%	\$ 590.268,47	\$ 17.333.815,78

En mérito de lo expuesto, de conformidad con los términos del artículo 446 del Código General del Proceso, el Despacho modificará la liquidación del crédito en la manera como quedó descrita en el anterior cuadro, la cual quedará por un monto total de **DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$17.333.815,78), por concepto de intereses moratorios.**

Para tal efecto se arriba soporte en cuadro de Excel en medio magnético de la liquidación del crédito.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO allegada por la parte demandante y en su lugar aprobar la realizada por el Despacho, por un monto total de **DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$17.333.815,78), por concepto de intereses moratorios**, en los términos del cuadro realizado en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: En firme esta providencia continúese con el trámite respectivo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNÉCCO
Juez

